

HIDROBOLETÍN FENTAP

Del 26 al 30 Octubre 2010 XIII Congreso Ordinario de la FENTAP en Cusco
Lunes, 23 de agosto de 2010 – Año V – Edición 1063 – www.fentap.org.pe

La FENTAP informa:

- En la Amazonía sobra el agua, pero falta el saneamiento
- EPS GRAU utiliza "máquinas de balde". Operación "desatoro" en redes del desagüe
- Activos que el 8 de setiembre presentarán sus propuestas
- Majes II tiene 8 postores
- El indefenso oficio de perforar en el mar

En la Amazonía sobra el agua, pero falta el saneamiento

IPS – AGOSTO2010.- Parece un contrasentido adoptar en la húmeda Amazonía una solución desarrollada para las sequías del Nordeste de Brasil. Pero las aguas pluviales, captadas en el techo y almacenadas en cisternas, están mejorando la salud y la vida en comunidades rurales de la región.



El gobierno del estado de Amazonas, en el noroeste del país, promueve desde 2006 su Programa de Mejoras Sanitarias y Almacenaje de Agua de Lluvia (Prolluvia) que ya benefició a 10.000 familias en 77 comunidades, con tejados, cisternas y sistemas de agua servida.

Su segunda fase, iniciada en mayo, se extenderá a otros poblados y distribuirá equipos de saneamiento.

Es que en la Amazonía hay exceso de agua, pero en general no es potable y muchas veces está contaminada por los desechos de los mismos pobladores, diseminando diarreas, hepatitis y otras enfermedades. Y no siempre el agua es fácilmente accesible.

A los 69 años, hipertenso y diabético, con 14 hijos dispersos por la Amazonía, Osvaldo Pantoja Ferreira ya casi no tiene fuerzas para cargar la lata con 20 litros de agua desde el río hasta su casa, donde vive con su mujer.

Son unos 100 metros de ladera escarpada y resbaladiza. "En el verano se hace más difícil", porque el río se aleja, señaló.

Caracol, como le llaman todos, se las ingenió para reducir sus trajines. Hace cuatro años instaló su propio sistema para recoger el agua de lluvia, con cañerías al borde del techo conduciéndola a un depósito de mil litros en una esquina de la casa y a otro menor del otro lado. Pero sigue trayendo agua del río, por creerla más potable.

Donde vive, en el estado de Pará, vecino por el este del de Amazonas, no hay ningún plan como el Prolluvia, que se inspiró en el Programa Un Millón de Cisternas,



"29 AÑOS DE LUCHA"

impulsado en el semiárido Nordeste desde 2003 por una red de 700 organizaciones sociales.

Con una fuerte participación comunitaria, ese programa ya casi ha instalado 300.000 unidades.

Antes, Caracol había intentado la tecnología industrial, pero las dos bombas que compró no aguantaron el esfuerzo. "El motor era muy débil, perdí dinero", lamentó. Luego se le rompió el generador de electricidad, inutilizando también su televisor que "con la antena parabólica se veía bien".

La Vuelta Grande del río Xingú, el tramo curvo de 100 kilómetros en cuya orilla construyó su casa de madera, tendrá la mayor parte de sus aguas desviadas para alimentar la central hidroeléctrica de Belo Monte, que enfrenta la porfiada resistencia de indígenas, movimientos sociales y ambientalistas.

La conclusión del proyecto, previsto para 2015, dejará Vuelta Grande en un eterno verano. En la Amazonía, las aguas determinan los ciclos de vida y del año. El invierno, de diciembre a abril, es cuando llueve más, casi todos los días. En el verano, el río Xingú baja mucho y descubre sus playas, cascadas y miles de islotes de piedras.

Pero antes que el río se aleje definitivamente, Caracol, un eximio ex cazador que tiraba en el ojo de jaguares y arirañas (nutria gigante) para asegurar buen precio a su piel intacta, espera ser integrado al sistema eléctrico nacional y recuperar su televisor, la nevera y la posibilidad de bombear agua del Xingú.

"La luz está a 15 kilómetros y debe llegar en los meses venideros", confió Caracol, ante la expansión del programa "Luz para todos" con que el gobierno federal de Luiz Inácio Lula da Silva llevó electricidad a 2,5 millones de familias rurales.

Con generadores propios, los indígenas de los grupos Arara y Juruna, también ribereños de la Vuelta Grande, bombean agua a sus aldeas desde el Xingú, uno de los principales y más largos afluentes de la vertiente meridional de la cuenca amazónica.

Pero temen que la construcción de la represa y los canales para la desviación parcial del río ensucie sus aguas.

"No sabemos como quedará la calidad del agua que consumimos", observó Arlete Juruna, hija del líder de la reserva indígena Paquçamba, donde viven 92 personas. Ella teme también la reducción de los peces, principal alimento de los indígenas, junto con el tracajá, especie de quelonio abundante en la cuenca.

"Acá no hay napa freática (acuífero subterráneo), son solo rocas, no se encuentra agua ni perforando 200 metros", advirtió José Carlos Arara, que encabeza el grupo Arara de la Vuelta Grande, de 150 miembros, y se opone decididamente a la central hidroeléctrica.

Monitorear la calidad del agua será indispensable, porque cemento y productos químicos usados en la construcción podrán contaminar los peces, matarlos o provocar intoxicaciones en sus consumidores, acotó. Muchas especies de peces se alimentan en el lodo donde se depositan los sedimentos, explicó.

Un impacto opuesto sufrirá la población más pobre de Altamira, capital de la cuenca del Xingú, con unos 100.000 habitantes. Una represa del complejo hidroeléctrico hará subir las aguas hasta la ciudad, ubicada 40 kilómetros arriba, inundando barrios ribereños de tres igarapés (riachuelos) que desembocan en el río.

Cristiana Rodrigues de Matos, de 29 años, sabe que se sumergirá la casa donde vive, en la orilla del Igarapé Altamira, que ya estuvo la mitad bajo las aguas en abril de 2009, cuando lluvias intensas rompieron los diques construidos por hacendados a lo largo del riachuelo, desalojando 30.000 personas.

Vivía en una calle más arriba y se mudó hace cuatro meses, a sabiendas de los riesgos. Es que exactamente a causa de la inundación del año pasado se abarató el



"29 ANOS DE LUCHA"

alquiler de las casas amenazadas, justificó Rodrigues, que trabaja a jornal en la limpieza de viviendas y tiene tres hijos, incluido un bebe de un año, y un marido albañil.

El estudio de impacto ambiental de Belo Monte estableció que 4.747 viviendas e inmuebles comerciales serán inundados y se desalojarán 16.420 personas en esos barrios de Altamira, que carecen de saneamiento y que en su mayoría echan sus desechos a los ríos y consumen agua de pozos superficiales y fácilmente contaminables.

Los desalojados, cuya cantidad doblará las previsiones según los opositores al proyecto, recibirán indemnizaciones y serán reasentados en barrios altos, con saneamiento y casas saludables, aseguraron autoridades responsables de la hidroeléctrica.

"En Tucuruí no se cumplieron esas promesas", recordó Vanusa Soares, refiriéndose a otra hidroeléctrica construida en la década de los 80 en el mismo estado de Pará. Ella elevó su casa sobre palafitos de casi un metro, buscando evitar otra inundación como la del año pasado.

Pero toda su calle, así como el barrio de casas de madera, no sobrevivirá a la crecida de las aguas represadas.

EMPRESAS DE AGUA

EPS GRAU utiliza "máquinas de balde" **Operación "desatoro" en redes del desagüe**

CORREO – 19/08/2010.- En los próximos dos meses, la EPS Grau se ha propuesto acabar con el afloro de aguas servidas en la ciudad. Para ello, contrató con el Consorcio Standar 10 la segunda etapa de las obras de mantenimiento en la red de alcantarillado de Piura y Castilla.

Según informó la entidad, de aquí a octubre se estima limpiar de desechos y basura unos 8 mil 520 metros de tuberías, con una inversión inicial de aproximadamente medio millón de soles.

De hecho, los trabajos comenzaron el pasado 10 de agosto y actualmente equipos denominados "máquinas de balde" laboran en los buzones que se ubican en las avenidas Sullana (altura de Enosa) y Sánchez Cerro (El Dorado).

Según la EPS Grau, estos trabajos de descolmatación tienen por objeto la recuperación hidráulica de los colectores y sub colectores, a fin de que las aguas servidas corran con fluidez hacia las cámaras de bombeo y, desde allí, a las lagunas de oxidación.

HIDROREGIONES

Activos que el 8 de setiembre presentarán sus propuestas **Majes II tiene 8 postores**

CORREO – 21/08/2010.- El gerente de Autodema y Majes II, Ronald Arenas Córdova, afirmó ayer que hay 8 postores activos que virtualmente presentarán sus propuestas el próximo 8 de setiembre con la intención de hacerse de la buena pro del proyecto energético y agroindustrial.



"29 AÑOS DE LUCHA"

Se trata de los consorcios: Majes Siguan II (Graña & Montero / Andrade Gutiérrez), Consorcio Majes (J. J. Camet / Besco S.A. / Errázuz del Perú S.A.C.), Odebercht S. A., Comercio Camargo Correa S. A, Consorcio Pro Majes Siguan II (Odebrecht S. A. / Odebrecht Invertemientos em Infra Estructura Ltda.), Consorcio Angostura (Cosapi S. A. / Cobra S. A.), Consorcio Majes (Hidalgo e Hidalgo S. A. Construcción y Administración S. A. / Conalvias S. A. / Infracon S. A.) y Consorcio Obrascon Huarte Lain S.A. / STX Construction Co Ltda.

PROCESO. Tras declararse desierta la presentación de los sobres 2 y 3 (propuestas de los postores) en marzo del 2010, se mejoró la oferta económica del proyecto incrementándose los aportes del gobierno regional a 57.7 millones de dólares y del gobierno nacional a 150 millones de dólares para la construcción de la fase I del proyecto (represa y túnel de derivación). El propio presidente Alan García llegó a Arequipa el 12 de junio pasado para declarar la viabilidad de Majes II y confirmar el incremento del aporte estatal.

BUENA PRO. El ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, presidente de la mesa técnica de ProInversión, anunció que el 15 de setiembre, es decir, en 3 semanas, ProInversión otorgará la buena pro al mejor postor, el 18 de octubre se firmará el contrato con el concesionario y el 7 de diciembre se inicia la construcción de las obras.

¿QUIÉN GANARÁ LA LICITACIÓN? Majes II ha sido dividida en 3 fases: a) la fase I (construcción de represa y túnel de trasvase), b) fase II (obras de irrigación de 38 mil hectáreas) y c) fase III, que no entra a licitación, comprende la construcción de las centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla.

Los componentes I y II tienen un costo de inversión de 404.7 millones de dólares de acuerdo a los estudios. El postor que ofrezca la mejor propuesta ganará la licitación.

¿CÓMO RECUPERARÁN LA INVERSIÓN? El gobierno regional y nacional lo harán con la venta de las 38 mil hectáreas de cultivo. El precio base es de 4 mil 040 dólares por hectárea y serán vendidas también al mejor postor. La unidad mínima de parcelaje es de 200 hectáreas.

El monto mínimo que recibirá el Estado por la venta de tierras será de 153.5 millones de dólares. La diferencia de inversión, 54.2 millones, se recuperará con la venta de agua no conductiva y con la generación eléctrica de Lluta y Lluclla.

El ganador de la buena pro recuperará su inversión (197 millones de dólares) con el pago que harán por el uso de agua los futuros propietarios de los terrenos de cultivo. El costo mínimo por metro cúbico de agua es de 0.0602 centavos de dólar; quiere decir que por hectárea pagarán 800 dólares al año y por las 38 mil hectáreas se recibirá 31.9 millones de dólares anuales. La concesión del agua al ganador de la buena pro de Majes II es por 16 años.

GARANTÍA SOBERANA. El Estado será quien cobre el agua de las 38 mil hectáreas durante los 16 años y tendrá que pagar los 31.9 millones anuales al concesionario. Existe una garantía soberana estatal de 29.76 millones de dólares en bancos internacionales; si el Estado no cumple, el concesionario cobrará esta garantía al día siguiente de vencido el plazo. Esto garantiza su inversión.

HIDROMUNDO

El indefenso oficio de perforar en el mar



“29 AÑOS DE LUCHA”

IPS – AGOSTO2010.- El derrame de petróleo en el Golfo de México ha revivido las inquietudes por las condiciones laborales en las plataformas de extracción de este país.

Bloqueos a la libertad sindical, falta de seguros, bajos salarios, poca capacitación y prácticas corruptas figuran entre las anomalías reinantes en la industria petrolera privada en México, denuncian sindicalistas y expertos en el tema.

"Los trabajadores de los contratistas privados no tienen la capacidad para la actividad costa afuera", aseguró a IPS Ysmael García, secretario del Interior del sindicato Orden de Capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana (OCPNRM).

"A los contratistas y subcontratistas lo que les interesa es hacer dinero", añadió el dirigente de este sindicato que agrupa a más de 300 miembros de empresas particulares.

En la Sonda de Campeche, la principal fuente petrolera mexicana situada en el golfo a más de 1.100 kilómetros al sudeste de la capital mexicana, trabajan unas 100 plataformas de explotación y producción, en las que laboran unas 20.000 personas. De ellas, unas 4.000 pertenecen a la firma estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y el resto a compañías privadas.

Ambos grupos pertenecen a universos distintos, pues los operarios de la petrolera estatal poseen seguro y atención médica, mientras que los segundos ejercen su oficio en una virtual indefensión, en una actividad riesgosa por su exposición especialmente a fenómenos extremos climáticos, como tormentas o temperaturas altas o bajas.

"México está en el fondo de la tabla mundial en temas como salud, inspección y seguridad industrial. Lo que está pasando es muy malo", ilustró ante IPS el escocés Norrie McVicar, director del grupo de trabajo sobre costa afuera (o mar adentro) de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF por sus siglas en inglés).

El tema de la industria petrolera en el subsuelo marino fue uno de los asuntos abordados en el 42 Congreso Internacional de la ITF, que agrupa a 368 sindicatos de 112 naciones, y que arrancó el 5 de este mes en la capital mexicana y concluye este jueves.

La ITF, con sede en Londres, lanzó 2005 una campaña para promover la seguridad en el ramo offshore y denunciar violaciones laborales.

La plataforma Deepwater Horizon, propiedad de la firma suiza Transocean Ltd, alquilada por la firma transnacional British Petroleum (BP), se incendió el 20 de abril frente a las costas del sudoriente estado estadounidense de Louisiana y se hundió dos días después.

La tragedia ocasionó la desaparición de 11 trabajadores y lesiones a otros 17. En total, 126 personas cumplían funciones en la instalación, 79 de Transocean, seis de BP y el resto eran eventuales.

Las plataformas, auténticos hoteles marinos, son estructuras metálicas asentadas sobre patas enclavadas en el fondo del mar. Algunas son sumergibles y semisumergibles y funcionan para extraer y transportar el petróleo de los pozos.

En septiembre de 2008, delegados de 45 países pertenecientes al grupo de trabajo acudieron a la Sonda de Campeche para documentar las condiciones de los trabajadores de las instalaciones petroleras.

De esa gira surgió el reporte "Sonda de Campeche: paradigma de explotación laboral", elaborado por la periodista mexicana Ana Pérez.

Las quejas por conflictos laborales con las prestadoras de servicios de Pemex rondan las 5.000 en la última década, según datos de la Secretaría (ministerio) del Trabajo y Previsión Social.

FENTAP



"29 AÑOS DE LUCHA"

Los trabajadores suelen permanecer en las torres de perforación por periodos de 14 y 28 días, seguidos por lapsos de permanencia en tierra de duración similar.

En 2003, el no gubernamental Centro de Acción y Reflexión Laboral citó a un grupo de arrendadoras de plataformas en México entre las mayores violadoras de leyes laborales.

"En las plataformas hay tres clases de trabajadores: los extranjeros, los de Pemex y los privados, cubiertos de manera diferente por las leyes. A las empresas les sale más barato contratar personal que no tiene la capacidad. Las autoridades saben de las irregularidades y no hacen nada", acusó ante IPS el abogado Víctor Cruz.

Su padre, Israel Cruz, representó exitosamente a los familiares de 247 tripulantes de una embarcación contratada por Pemex que se hundió en 1993 en la Sonda de Campeche y llegó a un acuerdo extrajudicial con los operarios del bote.

La plataforma Usumacinta, de Pemex, chocó en octubre de 2007 contra el pozo Kab-101 en esas mismas aguas, dejando 21 personas fallecidas y 19 heridas. Víctor Cruz representa legalmente a un grupo de sobrevivientes y deudos ante cortes mexicanas y estadounidenses en contra de la petrolera y los fabricantes de los equipos siniestrados.

Pemex reportó el año pasado 161 accidentes, con un índice de frecuencia de 0,42, menor en comparación con 2008. Para los contratistas, la estadística es de 137 y 0,51, respectivamente.

"Muchos accidentes no trascienden. La solución es presionar a Pemex para que se acabe este modelo corrupto", planteó Muñoz, un egresado de la Escuela Náutica del sudoriental estado de Veracruz y dirigente sindical desde 2000.

Marcos como el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo obliga a Pemex a inspeccionar las condiciones laborales. Desde 2005 la empresa pública aplica el Programa Emergente de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, aunque no ha obstado para que ocurran accidentes en el sector.

McVicar propuso la creación de un órgano regulador autónomo que se encargue de desarrollar prácticas transparentes y una rigurosa gestión de los riesgos a la seguridad laboral.

Tres miembros del grupo de trabajo se reunieron el lunes con autoridades mexicanas para discutir el tema y recibieron el compromiso de una supervisión a las plataformas, un paso novedoso hasta ahora.

"A Pemex no le conviene la supervisión, porque tendría que asumir una serie de compromisos. Creo que una solución es que todos los trabajadores, sin excepción, estén cubiertos por los seguros millonarios que las empresas suelen contratar en el extranjero", recomendó Cruz.

México no se apega al contenido de tratados como los convenios internacionales para Prevenir la Contaminación por los Buques y Artefactos Marítimos de 1973 y para la protección de la vida humana en el mar, cuya versión original data de 1914 y su última actualización es de 1974, acorde a las fuentes.

Además, México aún no ratifica la Convención del Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo de 2006 y que entraría en vigor el año próximo, luego de que 30 estados lo ratifiquen. En América Latina solamente Panamá lo ha hecho.

“Defender el Agua es Defender la Vida”

www.fentap.org.pe



“29 AÑOS DE LUCHA”